



2024 se vislumbra como un año de choques políticos

Guillermo Solano Gutiérrez/ CAMPUS
guillermo.solano.gutierrez@una.cr

El cuadrilátero de la política está lejos de cerrarse. Por el contrario, en los banquillos de los peleadores se alistan los guantes y todos los implementos para dar la pelea y esperar el sonido del ring. Esas aguas lejos de apaciguarse tienden a embravecerse.

En la teoría, el tercer año de la administración de un Gobierno debería ser el más productivo: la curva de aprendizaje tuvo que ser superada, la estrategia política debería estar más definida y las relaciones con otros Poderes de la República tuvo que haber sorteado un conocimiento previo, mientras el diálogo constructivo avanza. Sin embargo, estos preceptos parecen no cumplirse.

“A hoy no conocemos una agenda de Gobierno clara y sólida y yo no espero ver un cambio radical este año. Me aventuraría a decir que aún están en medio de esa curva de aprendizaje. El tema de la seguridad es una bandera que han asumido, pero más por presiones externas y de la coyuntura actual, pero no porque así lo hayan definido”, manifestó José Andrés Díaz, politólogo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

Aunado a lo anterior, tampoco se visualiza un cambio en la forma en que el Poder Ejecutivo conduce la negociación política, con un estilo vertical implementado por el presidente Rodrigo Chaves, que él mismo ha calificado como “gerencial”.

“Yo no veo voluntad del presidente para bajar el tono de su lenguaje, lo veo más bien sosteniendo un mensaje duro, autoritario, de populismo en algunas ocasiones, que se evidencia aún más cuando sus proyectos o iniciativas no se aprueban en el tiempo y en la forma en que él quiere”, señaló Carlos Carranza, coordinador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la UNA.

Esto se evidenció el 22 de noviembre anterior, cuando, durante la presentación de la Política Nacional de Seguridad Pública 2023-2030, ordenó la desconocatoria de los proyectos de seguridad que presentó en el pasado periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa.

Este ejemplo retrata el choque que el presidente ha hecho evidente, en este caso con el Congreso, pero que también se ha irradiado a otras instancias como el Poder Judicial en el tema de los procesos judiciales que se siguen a personas detenidas o con la Contraloría General de la República que ha objetado proyectos como el de Ciudad Gobierno, una de las iniciativas estrella de la actual Administración en temas de infraestructura.

Para el experto Carlos Carranza, el Mandatario debería contar con un equipo de análisis político y económico que pueda tener más peso en las decisiones que se toman, partiendo de criterios técnicos de los temas que se analizan. “La gestión pública debe tener una institucionalidad presente con un cuerpo de alto nivel, lo que podemos llamar la ‘cima estratégica permanente’”, reflexionó.

Sin embargo, la alta rotación entre jerarcas de la actual Administración refleja que ese es un desafío que no se ha logrado alcanzar. Citando a Maquiavelo, el experto José Andrés Díaz indicó que “el buen príncipe es el que tiene como ministro al que le dice lo que no quiere escuchar. Si tiene aduladores a su lado, va a perder el principado”.



En el ojo público

Esta perspectiva no debería obnubilar las prioridades que debe impulsar este Gobierno. Para Carlos Carranza, es imperativo que se avance en la discusión de temas sobre reforma del Estado, fortalecimiento de la competitividad, la situación

financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social y el financiamiento internacional para proyectos de infraestructura (como el proyecto con el Banco Centroamericano de Integración Económica por \$700 millones en discusión en la Asamblea). Proyectos en materia de seguridad sí han avanzado con más celeridad en estos primeros días del 2024, luego de la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional.

Empero, Carranza vislumbra a un Poder Ejecutivo interesado en seguir impulsando este año proyectos que han sido polémicos como el de jornadas extraordinarias de trabajo (conocido como 4/3) o el de la venta del Banco de Costa Rica.

Mientras que, en la acera del frente, se visualiza una agenda propia de control político, donde la labor de las comisiones legislativas especiales (principalmente la de financiamiento a partidos políticos o la que analiza los contratos en Sinart) tengan un mayor peso en los enfrentamientos entre fracciones.

José Andrés Díaz, del Idespo, tiene su propia valoración sobre el rol que ha venido desempeñando la oposición en el Congreso. “No han querido establecer coaliciones formales entre ellos o con el Gobierno. Uno infiere que ha existido cercanía entre el Ejecutivo y un partido como Nueva República, pero al mismo tiempo no quieren verse cercanos. En cambio, Liberación Nacional lleva 12 años siendo oposición y no ha logrado establecer una propuesta diferenciadora y constructiva”, indicó.

1º de mayo

De reojo, las fuerzas políticas comienzan a ver cómo será la conformación del Directorio el próximo 1º de mayo. El actual presidente del Congreso, Rodrigo Arias, ha dejado entrever que, si su reelección por tercer año consecutivo no se concreta, pensaría incluso en renunciar a su curul.

Carlos Carranza no estaría a favor de un cambio de timón. “No es el momento más oportuno”, indicó, mientras que José Andrés Díaz, considera que no ve motivos para que no resulte electo. “Tampoco veo a nadie de la fracción del Gobierno aspirando al cargo”. Ambos expertos destacan en la gestión de Arias el contrapeso que ha ejercido en los momentos de intenso enfrentamiento político, ya que ha sido él quien ha convocado a las partes en reiteradas oportunidades para restablecer los puentes de diálogo.

Lo que sí considera probable el politólogo José Andrés Díaz es que este panorama de constante enfrentamiento abone a un desgaste en el apoyo a la democracia, por parte de la ciudadanía, en momentos en que el más reciente estudio del Latinobarómetro 2023 determinó que mientras en el 2010 un 63% de la población apoyaba este sistema de Gobierno, en el 2023 ese porcentaje se redujo a un 48%.